

El mentidero de la Villa de Madrid



Mentidero de las Gradas de San Felipe el Real

Nº 720 Viernes 10 de Febrero de 2023

Se comenta en los mentideros madrileños...

- ✚ **Puigdemont al trullo**, *Emilio Álvarez Frías*
- ✚ **Ayuso y los otros**, *Juan Van-Halen*
- ✚ **La peligrosa ideología del «sólo si es sí»**, *Guadalupe Sánchez*
- ✚ **Tienen que anular la ley y destituir a Irene Montero**, *El Debate*
- ✚ **La agonía de Francia**, *Jesús Cacho*
- ✚ **La Complutense investiga a un catedrático por plantear que el aborto y la eutanasia son «crímenes aberrantes»**, *Roberto Marbán*

Puigdemont al trullo

Emilio Álvarez Frías

La verdad es que no siento ninguna preocupación por el futuro que tenga el que fuera presidente de la república catalana por un pis pas, para, a los pocos minutos, convertirse en un cagarruta que se escapa clandestinamente a otro país por no hacer frente a sus patochadas, cosa que ha venido sosteniendo ya demasiado tiempo tomándonos el pelo a todos los



españoles, además de costarnos un pas-tón sus andanzas por esos andurriales europeos. Y le aplicamos al ilustre desertor el mote de cagarruta, uno de los adjudicados a los pelotas que rodeaban a un tal Juan Francisco Giró, quien fuera presidente de Uruguay durante los años 1982-1983, años conocidos como de la Guerra Grande por aquellos pagos, pues sus paisanos, como nosotros, no ahorran burlas para aquella tropa

tanto de verso como en prosa.

Actitud que al parecer se va proliferando por cuanto hace unos días, Pablo Iglesias –el saltimbanqui y expresidente segundo de Pedro Sánchez, no el serio fundador del PSOE–, quien aseguró ante su morralla que «cuando VOX y

PP estén en el Gobierno muchos vamos a tener que ir a vivir a otro país, ante el aplauso de una buena parte de los medios de comunicación».

Que se tengan que ir a otras tierras se puede asumir con felicitaciones al dejarnos tranquilos. Y allí pueden juntarse los progresistas, los catalanistas y los etarras, junto con otros mamelucos parecidos a ellos, y aprovechen la ocasión para crear un buen sarao que complemente los que ahora tienen los franceses, y hagan lo posible para convertir los departamentos que están encima de los Pirineos en un país independiente, como el que sueñan hacer en España. Al fin y al cabo dichos departamentos en algunos momentos de la historia han tenido algo que ver con las provincias españolas próximas. De esta forma quedaría muy mono y controlarían el paso de España a Francia y viceversa y podrían pedir portazgo tanto a unos como a otros, tanto de ida como de vuelta que, junto con lo que sacaran de las arcas de los respectivos países, les permitiría vivir como reyes de los de antes.

Aunque últimamente no se oye mucho al respecto, quizá por no levantar polvos que perjudiquen los apetitos de Pedro Sánchez y de Pedro Aragonés en esas elecciones de las que sí se habla con generosidad, casi todos mostrando sus grandes aspiraciones, aunque no está igual de claro para unos que para los otros.

Lo que sí parece medianamente despejado es el panorama que se presenta ante Puigdemont –y alguno de sus amigos o amigas que se largaron a toda prisa cuando el aquelarre del 1-O–, pues ya se van abriendo la puerta de alguna de las cárceles de cuatro o cinco estrellas que existen en España, toda vez que el juez Llerena ha decidido tocar la partitura que a toda costa querían



esconder tanto un Pedro como el otro, ya que se aprecia el sonido de los instrumentos que continuamente está poniendo en marcha el juez con la intención de que, en el camino que recorre casi todos los días entre su residencia en Waterloo conocida como Casa de la República –según la placa que apareced en la fachada,

junto a la puerta de acceso al caserón–, y la sede del Parlamento europeo en Estrasburgo para que lo salven con la inmunidad como miembro del mismo.

Sin duda un Pedro más que el otro intentarán poner frenos al juez Llerena para que pasen los días, y los meses, y lleguemos a las elecciones sin haber aclarado nada de la sanfaina que montaron los separatistas, pues estando un poco distanciados unos de otros de cómo han de llevar adelante la petición de la separación, a todos conviene pasen las elecciones con la esperanza de que siga en La Moncloa la misma pareja que ocupa el palacete últimamente, toda vez que puede ser posible que tras el resultado del sufragio, el panorama cambie profundamente. Lo que esperamos gran parte de los súbditos de esta España tan encrespada y adolorida.

Porque en el arreglo cabe pensar que, de una u otra forma, Unidas-Podemos acaben sus días, marchándose Pablo Iglesias a otros parajes que les sean más beneficiosos, donde, con el dinero acumulado durante estos años, vivirán majestuosamente.

Ayuso y los otros

Ayuso se presenta a las elecciones con cartas ganadoras en la mano. Hay otros candidatos. Pero son eso: otros. Los demás. Como en una carrera ciclista: el pelotón

Juan Van-Halen (*El Debate*)

Escritor. Académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Telmo

Esta suma de rostros desconocidos, de actitudes ignoradas, de idiosincrasia plural, de personas indeterminadas que llamamos «la gente», en este caso los ciudadanos con derecho a voto, custodian en su libérrima decisión de introducir una papeleta u otra en la urna nada menos que la formulación del futuro durante unos años. En su municipio, en su comunidad o en el conjunto de la nación.

El voto responde a impulsos diversos. No descubro la pólvora si afirmo que los programas electorales son los textos menos leídos durante las campañas. Sobre el tema puedo alzar algunas convicciones empíricas. En buena medida la decisión del voto se ha tomado antes de las campañas y, desde luego, antes de la jornada electoral. Influyen comúnmente, acaso como factor decisivo, la personalidad del candidato, sus hechos y el plus que supone su forma de manifestarse y de defender a los ciudadanos. Ello unido a la fiabilidad demostrada por las siglas bajo las que se ampara. Al tiempo que a favor se vota en contra, y cuentan los aciertos o disparates del equipo gobernante.



Durante muchos años he conocido desde dentro la política madrileña. En la oposición y desde el partido del Gobierno, siempre en la actividad parlamentaria. Llegué a la política con los deberes profesionales hechos. Ahora hay demasiadas biografías –el ejemplo paradigmático es Podemos– en las que el primer trabajo es el cargo público. A la política hay que llegar para desarrollar lo ya aprendido, no para aprender.

La política autonómica de Madrid me llevó a tratar con personas interesantes, inteligentes y preparadas de todos los partidos, con las que procuré entenderme; siempre fui partidario del acuerdo. Hice muy buenos amigos. El enfrentamiento no conduce a nada positivo. Por eso no entendí las tensiones ma-

niqueas que eligió Zapatero ni el maniqueísmo desbocado y loco de su discípulo Sánchez; no es el socialismo que había conocido. Los 202 escaños de Felipe González en 1982 no hubiesen sido posibles desde el radicalismo; centró el mensaje y barrió.

A pocos meses de unas elecciones municipales y autonómicas se dan ya –estamos en campaña aunque no formal– las notas y condicionamientos que he señalado. El sanchismo improvisa candidatos con enorme riesgo. Ha llamado a Reyes Maroto, todavía ministra, que en su primera intervención, y ante Sánchez, no se sabía los distritos de Madrid, ciudad de la que quiere ser alcaldesa. Y Juan Lobato, candidato a la presidencia de la Comunidad, afirmó en el mismo acto que la crisis de 2008 se produjo con un Gobierno del PP, olvidando a Zapatero que, por cierto, con la crisis ya galopando aseguró que España estaba en la «Champions League» de las economías del mundo. Se ve que la mentira no es una estrategia nueva.

Traté a una Isabel Díaz Ayuso muy joven, cuando trabajaba en periodismo, su oficio, y luego como viceconsejera de Presidencia de la Comunidad y como diputada autonómica. Era ya una mujer muy activa, de ideas propias y deci-



sión para defenderlas. En los días en que se barajaban nombres para encabezar la candidatura de la Comunidad comí con un viejo amigo de larga experiencia y buen olfato. Coincidimos en que Ayuso, de la que no se había hablado aún, sería una buena candidata; a ella nunca se lo comenté. Fue presidenta en

2019 porque supo pactar. Y en las siguientes elecciones, 2021, consiguió más apoyos que el conjunto de las fuerzas de izquierda; el PSOE fue tercera fuerza política y Pablo Iglesias se desfondó; otra buena noticia de aquellas elecciones. La espectacular subida de Ayuso fue consecuencia de su gestión.

Uno de los errores de Sánchez, y no menor, fue desde el principio atacar con saña a la Comunidad de Madrid tratando de dañar a Ayuso. Ella recogió el guante. No es persona que deseche los retos. Son más de una docena los procedimientos abiertos contra decisiones del Gobierno que afectan directamente a Madrid lesionando su autonomía. La izquierda y los sindicatos vicarios utilizan su artillería para que cualquier problema que afecta también a otras comunidades se centre en Madrid por mera manipulación política. Es otro error porque la gente vive el día a día y ya no comulga con ruedas de molino. Sánchez debería tenerlo en cuenta de cara a las generales.

He escrito que en unas elecciones se valora, acaso como factor decisivo, la personalidad del candidato. Sus hechos, su credibilidad y su forma de manifestarse y defender a los ciudadanos. De eso ha dado pruebas Ayuso respondiendo con energía y sin morderse la lengua a las campañas de evidente ma-

nipulación que ha padecido. Caídos los viejos señuelos ya ampliamente compartidos, la izquierda ha tenido que refugiarse en la política woke, radicalismo dogmático, contradictorio e incoherente. El ejemplo último es el bodrio jurídico de la ley del «sólo sí es sí». Ayuso ha soportado calificaciones insultantes –hasta de asesina– sin dar un paso atrás. El reciente acto en la Universidad fue penoso. La negación de los valores universitarios. Son los usos que el rico propietario de Galapagar trasladó a la Universidad desde los tugurios. Ahora declara que si triunfa el PP abandonará España. Otro aliciente para el voto. En Venezuela le esperan con la chequera a punto.

Ayuso se presenta a las elecciones con cartas ganadoras en la mano. Hay otros candidatos. Pero son eso: otros. Los demás. Como en una carrera ciclista: el pelotón.

La peligrosa ideología del «solo sí es sí»

«La agitación por el caso de La Manada perseguía hacer irreconciliables las reivindicaciones del feminismo con las garantías del Estado de Derecho»

Guadalupe Sánchez (*El Subjetivo*)

Licenciada en Derecho, abogada en ejercicio

Que el eslogan del solo sí es sí sea al fin ley nos ha salido muy caro a todos, pero especialmente a las víctimas, cuya ansiedad y desazón ante la posibilidad de que su violador sea el siguiente en ver revisada la condena debería ser motivo suficiente para que dimitiesen todos y cada uno de los que, con su voto en el Congreso, permitieron que se aprobase la ley insignia de Igualdad.

Pero nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad por el daño cometido y se han enfrascado en una trifulca electoralista: el PSOE se lava las manos achacando los «efectos indeseados» de la ley a las carencias legislativas de la ministra Irene Montero, mientras que desde la formación morada se insiste en las bondades de la ley. Todo ello recurriendo a argumentos preñados de desvergonzadas e insultantes mentiras que se solapan entre sí, cuando no les llevan a incurrir en manifiestas contradicciones.



Pero como ya he dicho y escrito mucho al respecto, prefiero dedicar estas líneas a dar respuesta a una pregunta que me formuló mi compañera de podcast, Esperanza Aguirre, tras convenir ambas el sinsentido y la falsedad de las excusas dadas por los ministerios de Justicia y de Igualdad para justificar la ley: ¿por qué ese empeño en reformar los delitos sexuales?

Contrariamente a lo que la propaganda gubernamental sostenía y sostiene, la modificación jamás persiguió colocar el consentimiento de las mujeres en el

centro de la regulación penal, más que nada porque ya estaba en el centro. Siempre estuvo ahí y para comprobarlo bastaba abrir un Código Penal o consultar la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esta cantinela del consentimiento es la coartada con la que pretenden diluir sus respectivas culpas y distraernos de la verdad: la reforma de los delitos contra la libertad sexual era innecesaria y los motivos que la impulsaron no eran jurídicos, sino políticos.

Toda la artificiosa agitación social creada en torno al caso de La Manada perseguía trasladar el relato de una sociedad española machista arbitrada por los designios de un patriarcado judicial que desprotegía a las mujeres, haciendo irreconciliables las reivindicaciones del feminismo identitario con las garantías del Estado de Derecho.

Efectivamente, para las abanderadas de aquel Me Too, las reglas del juego del orden liberal se construyen sobre los cimientos de una economía de mercado sustentada sobre un concepto de igualdad que oculta un «contrato sexual» que se nos impone a las féminas. Uno de los referentes filosóficos de este movimiento es Carole Pateman, muy crítica con las democracias liberales, que afirma que el derecho patriarcal de los hombres sobre las mujeres se establece a partir de un pacto, de un contrato social, de forma que la libertad civil no es universal, sino



un atributo masculino que depende del derecho patriarcal: «Para las feministas la democracia no ha existido jamás».

Prueba de que todo este artefacto ideológico se trasladó al BOE utilizando la ley del solo sí es sí como vehículo, es que en el anteproyecto se contemplaba la exigencia de un consentimiento explícito cuya prueba recaía en el acusado, vulnerando así la presunción de inocencia. Su manifiesta inconstitucionalidad determinó su supresión, si bien sólo de la parte punitiva.

En la llamada parte administrativa de la ley, el eslogan de «hermana, yo sí te creo» está muy presente, hasta el punto de que para acceder a las numerosas prestaciones económicas y asistenciales que contempla la ley, basta que la mujer manifieste ante los servicios sociales que está considerando interponer una denuncia. Ni tan siquiera una sentencia absolutoria es óbice para obtener estas ayudas, entre las que se encuentra un pago único –que ronda los 3.000 euros–, el acceso preferente a la vivienda, o la obtención de un permiso temporal de residencia si la solicitante está en situación irregular.

Al fin y al cabo, de lo que se trata es de primar una resolución administrativa emitida inaudita parte a las sentencias dictadas tras un juicio celebrado en el seno de un procedimiento judicial con todas las garantías. Conseguir con la burocracia aquello que la legislación penal liberal no les permite: institucionalizar el Me Too y degradar socialmente la presunción de inocencia, principio civilizatorio liberal ausente en cualquier sistema totalitario. Pero jugar a

la revolución cultural usando el BOE como herramienta está teniendo consecuencias nefastas.

Al igual que ha sucedido con la reforma penal, esta parte de la ley acabará perjudicando a quienes siempre debieron estar en el centro del pensamiento de nuestros legisladores: las víctimas. Cuantos más incentivos perversos se generen para formular la solicitud, más esperas, trabas y escasez de recursos sufrirán las que de verdad lo necesitan.

Los alegatos a favor de la colectivización de los delincuentes sexuales que realizó la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en el aquelarre organizado por Podemos el pasado domingo para santificar la ley del solo sí es sí, son peligrosos: tanto la víctima como su agresor tienen que ser individualizados, para que la asistencia a la primera y la respuesta penal y penitenciaria al segundo sean los que les corresponden. La colectivización de la responsabilidad del delito, amén de nauseabunda, profundiza a menudo en la injusticia y en la distracción de los medios personales y materiales necesarios para prevenir y reparar.




La regulación de los delitos sexuales del Código Penal del 95 era buena, estaba bien hecha. Prueba de ello es que el mismo PSOE que vendió la ley del solo sí es sí como una victoria del movimiento feminista que venía a agravar las penas a los violadores, parece ahora habérsela leído y concluido que el modelo anterior era mejor. Porque la reforma que proponen implica, básicamente, recuperar no los nombres, pero sí la estructura y las horquillas de las penas.

Eso sí, por muy necesaria que sea esta reforma de la reforma, me permito disuadir a la oposición de dejarse arrastrar por la tentación de apoyarla si el cauce parlamentario elegido no es el del proyecto de ley, en la medida en que en su seno se dará voz a todos los consejos y comités que fueron ignorados con el solo sí es sí. Es primordial que esta ley se construya sobre la opinión de los verdaderos expertos y no del cortoplacismo electoralista que ahora interesa a los socialistas.

Tienen que anular la ley y destituir a Irene Montero

[El estropicio provocado por Sánchez ya no tiene remedio, pero por respeto a la ciudadanía debe ponerle un broche de cierta decencia y no un mero apaño](#)

El Debate

ada de lo que haga ya Pedro Sánchez podrá borrar ni compensar el escandaloso desaguado inducido por él mismo, su Gobierno y su ministra de Igualdad, autores al unísono de una ley bochornosa que,

lejos de proteger a las mujeres de la amenaza de los delincuentes sexuales, ha salido al rescate de éstos.

Más de 400 condenados han visto ya rebajada su pena, 30 más han salido incluso de prisión y cientos, cuando no miles, lograrán los mismos beneficios incluso en el caso de que se modifique la legislación: los expertos calculan que el 10 por ciento de los condenados en el pasado obtendrán esas rebajas gracias a la infinita temeridad del presidente.

Un estropicio de esta magnitud no se solventa con una rectificación, que bien pudo hacerse antes de la aprobación del engendro: no fue un error ni un accidente inesperado, como intentan hacer ver ahora desde Moncloa, sino una decisión premeditada y alevosa adoptada a pesar de tener sobre la mesa in- gentes advertencias formales de lo que podía ocurrir.

El propio Poder Judicial, el 25 de febrero de 2021, emitió un largo informe desmontando la supuesta novedad del «consentimiento» como eje de la reforma; recordando que ya estaba presente en el Código Penal vigente y alertando sobre los efectos perniciosos que tendría la nueva normativa para las víctimas. Y no le hicieron caso.

Sin esas señales, la ley tampoco debió prosperar, a poco que al Ejecutivo le asista la prudencia y el sentido común que cabe esperar de quien dirige un país. Pero con ellas, es simplemente inaceptable que algo así haya pasado y que, por imponer un delirio derivado de la enfer- miza ideología de género que envenena a la coalición, se ha- yan aumentado el dolor de las víctimas y el pánico de la socie- dad en su conjunto.



La disputa entre el PSOE y Podo- mos, instigadores del desastre, por cambiar o mantener la ley pensando ex- clusivamente en sus intereses electorales, añade un epílogo deplorable al despropósito y obliga a la sociedad a exigirles cuentas, hagan lo que hagan finalmente.

Porque si no hay dimisiones, si al final apañan una reforma pactada que aspire a salvar las caras de ambos partidos, y si además se redobla la propaganda en defensa de una ley discutible en su conjunto como tantas otras de este Go- bierno negligente; el mensaje de impunidad será terrible.

Solo para empezar, Irene Montero debe dejar de ser ministra. Y con ella todos sus colaboradores y todos los miembros del Gabinete que no se desmarquen públicamente de este desastre y no se disculpen, sinceramente, ante la per- pleja ciudadanía.

Si Sánchez, que es coautor de todo, no toma esas decisiones, su futuro quedará inevitablemente unido al de los desperfectos de una ley de la que él presumió y toleró que se aprobara con su firma y su aparente iniciativa. Su caso ya no

tiene remedio, pero al menos puede ponerle un ápice de dignidad en una despedida a la que solo queda ponerle fecha».

La agonía de Francia

Jesús Cacho (*Vozpópuli*)

Casi veinte años después de la publicación de *La France qui tombe*, el libro denuncia en el que en 2004 el ensayista Nicolas Baverez describía el desolador panorama de una Francia paralizada por la falta de crecimiento, el paro, el trabajo precario, las huelgas, los impuestos, la inmigración, la inseguridad, etc., etc., la Francia que camina por la tercera década del siglo no solo no ha resuelto ninguno de esos problemas sino que parece haberlos consolidado, cuando no agrandado. El panorama del país vecino, espejo en el que se mira toda Europa y por supuesto España, no puede ser más gris. «A Francia le va mal, los franceses ya no ven un horizonte, sólo el cielo oscuro de las crisis. El sentimiento de degradación, de retroceso, de colapso socava la sociedad. Desabastecimiento, inflación, desintegración de los servicios públicos... Los golpes y los males se multiplican, provocando un malestar creciente, un fuerte sentimiento de declive en la población», escribía Angélica Negroni en *Le Figaro* el pasado 20 de enero. «¿Cómo, en efecto, podríamos haber imaginado que la mostaza llegaría a desaparecer de las tiendas, como el aceite, la pasta, el arroz, el paracetamol y otros productos de primera necesidad? El país sufre la falta de maestros, médicos y hasta enfermeras. Tras la pandemia y el inicio de la guerra de Ucrania se suceden los signos de desintegración. ¿Cómo, de nuevo, podríamos haber imaginado quedarnos sin electricidad [casi la mitad de sus 56 reactores nucleares parados por trabajos de mantenimiento] este invierno? Las ciudades cortan el alumbrado público



por la noche y las empresas apagan la calefacción desde el jueves a última hora e imponen el teletrabajo a sus empleados hasta el martes. Si esto no es el fin del mundo, lo parece».

Las protestas multitudinarias contra el proyecto de reforma de las pensiones han vuelto a ofrecer al mundo la imagen de una

Francia absolutamente reacia a cualquier clase de cambio por necesario que parezca. Tras la primera gran manifestación del 19 de enero, más de un millón de personas volvió a echarse a la calle el pasado martes, y para este 7 de febrero se anuncia otra gran movilización que afectará al transporte, la educación, la sanidad, la energía, la administración, correos... Un nuevo pulso a Macron por parte de una intersindical para quien «nada justifica una reforma tan injusta y brutal. El Gobierno debe escuchar el rechazo masivo a este proyecto y retirarlo». Cualquier anuncio de reforma que afecte al generosísimo

Estado del bienestar galo (más de 80.000 millones en subvenciones durante el binomio 2020/21) provoca la furiosa reacción de una sociedad que sigue aferrada a la idea hedonista de pertenecer a un país rico pero que ha dejado de serlo, reacción encabezada por unos sindicatos a los que apenas están afiliados el 9% de los trabajadores. Razones demográficas y de sostenibilidad del sistema de reparto hacen imprescindible un nuevo ajuste en la reforma llevada a cabo en 2010 por Nicolas Sarkozy (pasó la edad de jubilación de 60 a 62 años) y que Emmanuel Macron ya intentó en su primera legislatura con estrepitoso fracaso.

La reforma de las pensiones estaba en el frontispicio de su victoriosa reelección como presidente el año pasado. Las legislativas posteriores, sin embargo, dañaron su poder de maniobra al perder la mayoría en la Asamblea. Con plomo en las alas, Macron ha propuesto una reforma modesta, renunciando de entrada al objetivo inicial de los 65 años, consistente en retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 (67 en el caso de España a partir de 2027) a lo largo de un periodo de seis años. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que esos 64 son claramente insuficientes en el horizonte del 2030 y en



un país donde el aumento de la esperanza de vida, junto al paralelo envejecimiento de la población (una cuarta parte de sus 68 millones de habitantes son ya jubilados) harán imprescindible volver a elevar el guarismo. Pues ni hablar. Eso es inaceptable para los franceses. Sucedió con Chirac, volvió a ocurrir con Sarkozy (a pesar del relativo éxito de

2010) y se repite ahora con Macron: los Gobiernos plantean las reformas, la gente se echa a la calle y, tras violentos altercados con la policía, terminan plegando velas y metiendo el proyecto en un cajón. Porque la vida sigue igual. *C'est normal*. La poderosa Francia de los bosques y ríos, la Francia nuclear, la Francia del gran lujo, es capaz de resistir cualquier desafío. O eso parecía, porque la Francia de hoy es un país gravemente enfermo.

La deuda exterior ha superado ya la barrera de los 3 billones o el equivalente al 115% de su PIB y se ha convertido en la tercera mayor del mundo tras la de EE.UU. y Japón, economías mucho más potentes. La deuda per cápita roza ya los 46.000 euros, frente a los 40.000 de Gran Bretaña, los 37.000 de Grecia o los 32.000 de España. El gasto público, el más alto de la OCDE, supera el 61% del PIB (51,6% en el caso de España, 47,8% Portugal, 42,3% EE.UU.); el déficit público ronda el 5% y el comercial rebasó ya los 100.000 millones y sigue aumentando. Sus inversiones en el exterior han caído drásticamente en los últimos años. En realidad, Francia ha dejado de pertenecer a la Europa rica del norte para integrarse de pleno derecho en el llamado «Club Med» de países del sur, víctimas de Gobiernos acostumbrados a gastar como si no hubiera un mañana, muy por encima de los bienes y servicios que produce. La vieja

aspiración gala de coliderar la UE con la poderosa Alemania ha pasado a mejor vida, un sueño roto, como el sentimiento de frustración provocado, en el país de Pasteur y Sanofi, por la incapacidad para desarrollar su propia vacuna anti Covid. Síntomas alarmantes de la decadencia de una nación.

En un proceso de desindustrialización acelerado, Francia ha perdido dos millones de puestos de trabajo en 20 años en la industria, que ha pasado a representar apenas el 10% del PNB frente al 20% de hace un par de décadas. Los fracasos se repiten en política exterior. Francia se ha visto obligada a abandonar Malí, donde ha sido sustituida por el pro ruso grupo Wagner. Como una humillación sintieron muchos franceses la abrupta cancelación (septiembre de 2021) del contrato suscrito con Australia para la construcción de 12 submarinos que ahora se harán en EE.UU y UK. Demasiadas afrentas en



muy poco tiempo. «Nuestro país no acepta que ahora juegue en segunda di visión cuando todavía se precia de ser una gran potencia», podía leerse hace escasas fechas en *Libération*. Sigue contando con infraestructuras excelentes, con algunas compañías de primer nivel, sigue comiendo bien y bebiendo mejor, pero Francia es un país que vive por encima de sus posibilidades, con una clase media, la pa-

gana de esta aglomeración de crisis, que se está empobreciendo, como demuestra la abundancia de tiendas de descuento. Es el caso de la marca holandesa Action, que en 10 años ha pasado de 100 tiendas a las 700 que hoy tiene abiertas en todo el país, y cuyo éxito reside en vender, al margen de la alimentación, cientos de artículos a menos de un euro. Una población que se empobrece pero que se niega a prescindir de un sistema asistencial tan generoso como imposible de financiar sin el recurso a la deuda, con maquinistas de los SNCF que se jubilan con 52 años y con la pensión máxima. Una sociedad que sigue reclamando del Estado más y más ventajas y ayudas sociales. Un callejón sin salida.

Junto a la pérdida de pujanza económica se ha producido un paralelo deterioro del clima social. Empezando por la educación, la madre de todas las batallas, de la que generaciones de franceses se han sentido orgullosos, y siguiendo por los servicios públicos, con una Sanidad que no funciona y un transporte (el caos de los trenes de cercanías de París) que tampoco. Pleitear o simplemente reclamar algo ante la Administración se ha convertido en un asunto Kafkiano. Nadie contesta. Más grave que esa inoperancia es quizá el desapego de una mayoría de franceses de su clase política, la sensación de que la política ya no da respuesta, ya no es capaz de mejorar la vida de la gente. La derecha republicana se ha fragmentado y el PS ha sido engullido, insignificante, en la coalición de extrema izquierda de la Francia Insumisa que lidera un Melenchon dispuesto a quemar la calle y a reclamar la jubilación a

los 60. En la extrema derecha reina Le Pen y tipos como Éric Zemmour, intelectuales conservadores que se resisten a aceptar el declive galo. No cabe mejor símbolo de la decadencia del país vecino que el cierre de la famosa ENA (*École nationale d'administration*), la escuela en la que, desde siempre, se ha educado la élite que ha servido en los altos cuerpos de la administración del Estado y la clase política.

La universidad ha caído víctima de la carcoma de las nuevas ideologías importadas de los campus norteamericanos, y buena parte de los jóvenes que salen de ella se inclinan por soluciones de izquierda plenas de voluntarismo. Una relativamente reciente encuesta nacional reveló que casi dos tercios de los preguntados dijeron tener una opinión «bastante mala» o «muy mala» del capitalismo. La solución, entonces, parece estar en acabar con los millonarios tipo Bernard Arnault, el hombre más rico del mundo, dueño del imperio del lujo LVMH, (epígono de nuestro Amancio Ortega, sobre quien la izquierda española vuelca toda su bilis), hacer pagar a «los ricos» los desfases del sistema para enmascarar la negativa radical de buena parte de la población a reformar su ineficiente y elefantiásico Estado del Bienestar. Ciertamente que las culpas están repartidas: «Existe la idea de que las reformas deben hacerse exclusivamente en detrimento de los trabajadores», argumenta Dominique Méda, profesora de sociología en *Paris Dauphine-PSL*. «Y esto sucede en medio del anuncio de reparto de enormes dividendos y el aumento disparatado



de las fortunas de los multimillonarios, lo que lógicamente cabrea a la gente». Hay, desde luego, una sensación general de cansancio, un agotamiento que impide pensar en el largo plazo. Lo ha definido bien el ex primer ministro Édouard Balladur, para quien «pocas veces ha atravesado Francia dificultades tan graves, ya sea en el ámbito económico, social, educativo, de seguridad o de inmigración. Es como si estuviéramos presenciando un colapso general».

Parte del fiasco francés tiene que ver, como en tantas partes, como en España, con la depauperación de la política. «El derrumbe del nivel intelectual de la clase política es una amenaza para la democracia», escribía Maxime Tandonnet en *Le Figaro* este 2 febrero. Es la sensación de fracaso que acompaña a Macron, esa cierta idea de vendedor de peines que queda de él tras sus brillantes discursos. Lo ha descrito el historiador y ensayista Jacques Julliard, para quien «Macron se ha mostrado incapaz, por falta de voluntad o quizás de talento, de ser el hombre de la reconstrucción nacional. Pero si no es De Gaulle, al menos podría haber sido Pompidou o Giscard». Son muchos los que piensan que el inquilino del Elíseo terminará metiendo en el baúl su reforma. Al fin y al cabo, esta secuencia de hechos es ya una tradición francesa. De

modo que las pensiones, as usual, se seguirán financiando con deuda, con más deuda. Así hasta que los mercados reparen un día en que ni este Gobierno ni sus sucesores van a ser capaces de emprender ningún tipo de reforma seria, por lo que esa deuda va a seguir creciendo hasta alcanzar límites insoportables. Ocurre que cuando los mercados pierden la fe en la clase política de un país, suceden cosas muy extrañas. Sucedió hace unos meses en Gran Bretaña, donde obligaron a dimitir a la primera ministra Liz Truss acorralada por el desplome de la libra, consecuencia de la incongruencia de su programa de expansión del gasto público con paralelo recorte de impuestos. De modo que puede que muchos franceses canten victoria el día en que su «pequeño Napo» retire la reforma, satisfechos de haber doblado de nuevo el pulso al Gobierno, pero ignorantes de que el colapso de su deuda pública, que será tan brutal como repentino, está quizás a la vuelta de la esquina. Las lecturas en clave española de esta moderna tragedia griega son más que obvias.

La Complutense investiga a un profesor por plantear que el aborto y la eutanasia son «crímenes aberrantes»

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología abre una investigación interna al docente por compartir sus reflexiones sobre ambos temas con sus alumnos en un correo electrónico. Regreso al campo de batalla de la Complutense: «Los cabecillas de las protestas fueron varios profesores»

Roberto Marbán (*El Debate*)

La Universidad Complutense ha abierto una investigación interna al profesor de la asignatura de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales, Carlos de la Puente Viedma, por un correo electrónico que envió a sus alumnos que hacía las veces de presentación de la asignatura, que comienza este cuatrimestre.

A pesar de ser un e-mail dirigido a cada uno de los estudiantes de su asignatura, el contenido del mismo ha acabado colgado en las redes sociales, lo que ha propiciado la polémica. El docente, en dicha carta, añadía también que servía «para hacer algunas reflexiones» sobre la asignatura.

«En esta asignatura, aunque su nombre dice una cosa, la realidad es que se trata de “Aprender a pensar”, y trata de conocimiento. Hablaremos de cosas y ustedes tienen que formar su opinión en base a saber observar, leer, escuchar, mirar y relacionar».

De la Puente Viedma invita a sus alumnos a que hagan su primera reflexión respecto al mediático caso de Dani Alves, encarcelado por, supuestamente, violar a una mujer, y el impacto de la ley del «solo sí es sí» sobre estos casos. «Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero todo



el mundo es sospechoso hasta que aparece el culpable. Y la responsabilidad es mayor cuanto más alto es el rango de la persona», recuerda.

Aborto y eutanasia

Pero lo que más parece haber indignado a la institución pública son sus reflexiones en torno a dos temas candentes de la actualidad, el aborto y la eutanasia: «A pesar de lo que pueda decir la ley humana, el aborto y la eutanasia son crímenes aberrantes y abominables contra la creación. Como diría un creyente, Dios castigará a Occidente y la versión laica, que el inconsciente pasará factura».

«Los virólogos y otros profesionales dicen que los virus no son formas de vida. Lo primero que les preguntaría es: “¿qué es la vida?”. Y después según la respuesta decidir si son o no formas de vida. Como ven, tenemos mucho trabajo por delante y esta sociedad española es una fuente inagotable de trabajo» explicaba el profesor en el e-mail.



Investigado

Según *El Español*, la controvertida facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde ha vuelto también Pablo Iglesias a dar clase como profesor asociado, ha tomado cartas en el asunto para abrir una investigación interna sobre De la Puente Viedma.

En cambio, esa rapidez para investigar a este profesor ha lucido, pero por su ausencia a la hora de tratar hechos como la suciedad del edificio, lleno de pintadas, amenazas y vivas a dictadores e insultos a España. Tampoco ha estado muy rápida la vicedecana de Estudiantes y Participación, Elisa García Mingo, para alzar la voz por la anomalía que supone que el ex secretario general de Podemos y exvicepresidente de Gobierno aproveche su regreso a las aulas para que el libro de su compadre Juan Carlos Monedero sea lectura obligatoria.